

EDUCACIÓN NEGADA, FUTUROS TRUNCADOS: ADOLESCENCIAS EN MOVILIDAD ANTE LA EMERGENCIA EDUCATIVA EN CENTROAMÉRICA



La **Campaña Mundial por la Educación** es un movimiento global formado por más de 120 coaliciones de educación nacionales y regionales, organizaciones internacionales y movimientos liderados por jóvenes. Trabaja en más de 100 países de todo el mundo en defensa de la educación como derecho humano básico y como bien público global, con la misión de velar por el cumplimiento de los compromisos de los Estados y la comunidad internacional en materia educativa, en el marco de lo establecido por la Agenda 2030 de Educación, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4).

En España, la coalición estatal de la CME está integrada por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje y Plan Internacional España. Además, cuenta con la colaboración de más de 30 entidades que participan en las diferentes acciones de movilización a nivel estatal y territorial.

A través de los equipos territoriales, la Campaña está presente en la mayoría de las Comunidades Autónomas de España.

Página web:

cme-espana.org

Autores:

Mariana Cruz Murueta y Laura Tiana Alvarez

Fotografías:

Pablo Tosco / Campaña Mundial por la Educación (CME) España

Arte y maquetación:

Iker Alcántara

Fecha de edición:

Noviembre 2025

Se permite la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento siempre que se mencione la fuente y se haga sin fines comerciales.

Para más información sobre los temas tratados en este documento, póngase en contacto con:

info@cme-espana.org

Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto "Campaña Mundial por la Educación: llamada a la acción por el ODS 4". El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autoras y de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación y no refleja, necesariamente, la postura de la AECID.

Con la financiación de:



Campaña Mundial por la
EDUCACIÓN
Coalición española www.cme-espana.org

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este *briefing paper*, empezando por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje y Plan International, como integrantes de todas las organizaciones que forman parte de la Coalición de la Campaña Mundial de la Educación en España, así como a sus equipos en El Salvador, Guatemala y Honduras por su compromiso y valiosa colaboración a lo largo del proceso.

Transmitimos un especial reconocimiento a todas las personas que participaron en el trabajo de campo. Agradecemos de manera muy especial a las familias, al personal docente, a las y los directores, y a los equipos administrativos de las escuelas por su tiempo, su apertura y su compromiso. Muy especialmente, expresamos nuestro profundo reconocimiento a las y los adolescentes que, a pesar de enfrentar contextos de alta complejidad y riesgo derivados de la movilidad forzada, continúan apostando por su educación y su futuro. Su capacidad de resiliencia, su esperanza y su deseo de construir nuevas oportunidades inspiran y dan sentido a este análisis. Su participación fue fundamental para reflejar los retos y las esperanzas de la educación secundaria en contextos de movilidad; este documento constituye un testimonio de su voz y de su esfuerzo colectivo.

Agradecemos igualmente la participación de las autoridades educativas locales y nacionales, de los miembros de los mecanismos de coordinación, del personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO, en inglés), así como de las y los miembros del Grupo Regional de Educación (GRE-LAC), por su orientación y asesoría a lo largo de este análisis, y por su apoyo para complementar la información proporcionada por personas informantes clave. Su acompañamiento ha sido fundamental para el desarrollo de este trabajo.

Este documento fue elaborado por Mariana Cruz Murueta y Laura Tiana Álvarez, en el marco de la Campaña Mundial por la Educación, con el apoyo y colaboración de las organizaciones integrantes de la Coalición en España, así como con el apoyo de organizaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	4
ACRÓNIMOS	6
RESUMEN EJECUTIVO	7
I. INTRODUCCIÓN	9
II. CONTEXTO REGIONAL DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA	12
III. MOVILIDAD Y ACCESO A LA EDUCACIÓN: PRINCIPALES DESAFÍOS Y CONSECUENCIAS	17
Desafío 1. Fortalecer la coordinación institucional y mejorar la disponibilidad y el acceso a información confiable	17
Desafío 2. Apoyar y promover la planificación de una oferta educativa de calidad	18
Desafío 3. Fortalecer la integración en la atención psicosocial y el reconocimiento académico	19
Consecuencias estructurales: calidad, equidad y exclusión educativa	21
IV. RECOMENDACIONES PARA UNA RESPUESTA EDUCATIVA INTEGRAL	22
Compromiso de la cooperación multilateral y donantes	23
Liderazgo de los Estados	23
Participación y articulación de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales	24
Hacia una agenda compartida: principios y compromisos transversales	25
V. CONCLUSIÓN	26
VI. REFERENCIAS	28

ACRÓNIMOS

ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

CME: Campaña Mundial por la Educación.

EA: Educación Acelerada.

EeE: Educación en Emergencias o Educación en situaciones de emergencia.

ECW: Education Cannot Wait.

GAC: Global Affairs Canada / Asuntos Globales Canadá.

GEC: Clúster de Educación Global.

GRE-LAC: Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe.

INEE: Red Interagencial para la Educación en Situación de Emergencias.

ODS: Objetivos del Desarrollo Sostenible.

OIM: Organización Internacional de Migración.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

PROHECO: Proyecto hondureño de educación comunitaria.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

USAID: Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América.

RESUMEN EJECUTIVO

Centroamérica vive una emergencia educativa sin precedentes, marcada por la expulsión, el desplazamiento y la movilidad forzada de su adolescencia, un fenómeno invisible para muchos, pero devastador en sus consecuencias humanas y sociales. Este documento se centra específicamente en las realidades de El Salvador, Guatemala y Honduras, donde miles de adolescentes migran, retornan o quedan atrapados en tránsito por circunstancias que les niegan el derecho a una educación segura y de calidad, mientras las políticas, las instituciones y la cooperación internacional parecen aún lejos de responder a la dimensión del reto.

Las historias detrás de los números son diversas: adolescentes que huyen de la violencia, jóvenes que retornan tras ser deportados, niñas y niños indígenas atravesando fronteras en busca de protección, y quienes, con o sin documentos, enfrentan una exclusión que es tan escolar como social. En cada uno de estos casos, la fragmentación institucional, la insuficiencia de datos y recursos, y la rigidez normativa agravan el desafío. A ello se suma que, en el mejor de los casos, **sólo uno de cada dos adolescentes logra completar la secundaria**, siendo la situación mucho más crítica para quienes migran, han sido desplazados o viven en pobreza extrema (BID, 2023; Plan Internacional, 2023).

No se trata únicamente de acceso. La exclusión se expresa en la falta de acompañamiento psicosocial, la violencia de género, la discriminación hacia comunidades rurales, indígenas y personas con discapacidad, y la ausencia de rutas flexibles de reintegración escolar. La pandemia y las crisis climáticas solo han profundizado estas brechas, mientras la cooperación internacional y los presupuestos públicos para la educación se ven recortados o redirigidos a otras prioridades.

En este contexto, el enfoque del triple nexo, acción humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz, se plantea como vía de transformación profunda: articular respuestas inmediatas de protección, políticas de largo plazo basadas en inclusión y equidad, y acciones para fortalecer la cohesión social y la justicia. La educación emerge así como motor estructural capaz de romper ciclos de exclusión y migración, y de consolidar sistemas resilientes y comunidades cohesionadas.

Este informe tiene un enfoque cualitativo que hace uso de fuentes primarias, entrevistas y grupos focales con adolescentes, familias, docentes y líderes escolares, y fuentes secundarias, tales como otros informes, para analizar prácticas y obstáculos institucionales, así como las posibilidades de acceso seguro y efectivo a una educación inclusiva de calidad. Se destaca no sólo la magnitud del desafío, sino la urgencia de políticas pragmáticas y sostenidas, y una mayor asignación de recursos para la EeE, que hoy recibe apenas el 3% de la ayuda humanitaria mundial, mientras el retiro de fondos clave pone en riesgo la continuidad de programas vitales.

A lo largo del informe, se muestran los efectos de la movilidad sobre el acceso escolar y la protección de derechos, con especial énfasis en adolescentes indígenas, rurales, con discapacidad y en mujeres, quienes enfrentan obstáculos adicionales. La exclusión y el rezago educativo no solo limitan el desarrollo académico, sino también la inserción sociolaboral, la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía, perpetuando la pobreza y la inestabilidad social.

El informe concluye que es momento de reconocer que la emergencia educativa centroamericana corre el riesgo de normalizarse y cronificarse, y que sólo una acción colectiva y sostenida que articule sistemas de identificación, modalidades escolares flexibles, financiamiento multianual, formación docente interseccional y cooperación multilateral eficaz, permitirá que ningún adolescente quede privado de su derecho a aprender y construir un futuro digno. Se invita con urgencia a los Estados, donantes y aliados a asumir este compromiso estratégico, situando a las y los adolescentes en movilidad en el centro de la respuesta educativa y haciendo de la educación en emergencia el punto de partida para crear sociedades que promuevan el desarrollo, la protección y la paz sostenibles en la región.

La crisis humanitaria que atraviesan niños, niñas y adolescentes en Centroamérica, especialmente quienes se han visto forzados a abandonar sus hogares y países por causas como la violencia, los eventos extremos por fenómenos naturales y la pobreza estructural, demanda respuestas urgentes y sostenidas tanto de los Estados como de la cooperación internacional. A la par de la atención a las necesidades inmediatas, es imprescindible que los sistemas educativos evolucionen para convertirse en entornos protectores, inclusivos y resilientes, capaces de acompañar a las infancias y adolescencias en movilidad y brindarles verdaderas oportunidades de desarrollo y bienestar.

La realidad diaria de niños, niñas y adolescentes en Centroamérica está marcada por trayectorias educativas truncadas, muchas veces sin previo aviso y sin haber tomado esa decisión de manera voluntaria. Factores estructurales como la falta de acceso igualitario, la ausencia de respuestas eficaces de los sistemas escolares, la ausencia de mecanismos adecuados, flexibles y coordinados que permiten garantizar la inclusión y continuidad educativa, las carencias en la documentación, la rigidez en las normativas y las prácticas discriminatorias, han dejado a un importante número de adolescentes fuera de la escuela o atrapados en círculos de abandono, entendidos como procesos repetitivos de exclusión y reingreso precario al sistema educativo (Krichesky, M., 2023). **Las cifras muestran que menos del 50% de los adolescentes completa la secundaria en Honduras y Guatemala, y sólo un 60% en El Salvador, brechas que se agravan en contextos de movilidad y exclusión social** (IADB, 2018). En El Salvador, Guatemala y Honduras, la movilidad humana y las condiciones socioeconómicas aceleran la fragilidad del derecho a la educación, profundizando desigualdades y visibilizando las inequidades preexistentes.

Según la caracterización y la realidad de este grupo heterogéneo, el análisis de la respuesta a sus necesidades y prioridades se sitúa en el marco de la Educación en Emergencias (EeE), bajo los estándares de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, 2025). Sin embargo, cuando los y las adolescentes se integran a las escuelas ordinarias, sus necesidades específicas pueden pasar desapercibidas. Las rutinas y prácticas cotidianas del personal escolar suelen estar orientadas al alumnado en general y no necesariamente contemplan las condiciones específicas de quienes están en situación de movilidad.

De este modo, si bien la EeE ofrece una base sólida para comprender y responder a los retos inmediatos que enfrentan las y los adolescentes en contextos de crisis, la realidad es que las dinámicas complejas de la movilidad humana y los factores estructurales de exclusión que caracterizan a la región demandan una priorización por parte de la comunidad internacional que trascienda este enfoque. En muchos casos, los desafíos educativos no se identifican dentro de los parámetros tradicionales de la EeE, lo que limita la respuesta articulada entre actores y comunidades educativas en los tres países.

Por ello, el análisis propuesto busca ampliar la perspectiva para, por un lado, abordar la educación en su sentido más integral -con especial énfasis en la educación secundaria-, y por otro, examinar el problema, las soluciones y las recomendaciones desde la lógica del triple nexo. Este

enfoque articula acción humanitaria, desarrollo sostenible y consolidación de la paz, y subraya la necesidad de superar la fragmentación sectorial y el trabajo en silos para garantizar la continuidad del aprendizaje, la protección integral de la adolescencia y la resiliencia de quienes han visto interrumpida o negada su trayectoria educativa. Además, facilita la atención a diversos sectores de la población que corren el riesgo de quedar al margen de la atención institucional de los distintos sistemas.

Para los fines de este informe, al hablar de “paz” tomamos como referencia la definición del **triple nexo** propuesta por la INEE, considerando que el componente de consolidación de la paz comúnmente utilizado dentro del nexo abarca diversas fases, y que dichas etapas pueden diferir significativamente entre países, contextos e incluso dentro de una misma nación según las circunstancias particulares. De este modo, en algunos casos “paz” partirá de la idea de **construcción de la paz**, para, paulatinamente, poder llegar a hablar de “consolidación” (INEE & UNESCO, 2023).

Este informe se enmarca en las acciones que la Campaña Mundial por la Educación en España realiza para defender la educación como derecho fundamental, no un privilegio a perder en tiempos de crisis. Para su realización, además de la revisión y análisis de diversas fuentes secundarias, se han mantenido 26 entrevistas a informantes clave, 2 grupos focales con docentes y líderes escolares, 3 grupos focales con familias y 5 grupos focales con adolescentes. A partir de este acercamiento, el documento se centra en la realidad de las y los adolescentes en situación de movilidad, y examina cómo las políticas, recursos y prácticas del nivel secundario o educación media básica están, o no, respondiendo a sus necesidades concretas. En éste se destacan, además, las prácticas cotidianas correspondientes a las acciones y decisiones que el personal escolar y las comunidades educativas realizan diariamente -la acogida de las y los estudiantes, la gestión de trámites, el apoyo pedagógico y socioemocional y su forma de interacción dentro y fuera del aula-, los obstáculos burocráticos e institucionales, y las carencias de la oferta educativa, pero también las rutas posibles para un acceso efectivo y seguro a una educación inclusiva y de calidad.

Además, busca no sólo visibilizar la magnitud del reto, sino también subrayar la importancia de que los sistemas educativos estén preparados para recibir de manera oportuna a la población desplazada. Asimismo, hace un llamado a la cooperación internacional, a los donantes, a todo el conjunto de actores nacionales y locales, para que impulsen soluciones pragmáticas, contextualizadas y sostenidas en el tiempo.

Es momento de reconocer que la emergencia educativa en Centroamérica se ha vuelto tan persistente que amenaza con convertirse en un estado crónico, invisibilizándose frente a la opinión pública y relegándose en las prioridades internacionales, lo cual no puede ni debe ser así. Afrontamos un momento crítico: aunque la ayuda canalizada por la Unión Europea ha permitido sostener respuestas esenciales, la EeE sigue recibiendo apenas el 3% de la ayuda humanitaria mundial, proporción que también se replica en América Latina, a pesar de representar una demanda central en contextos de crisis y violencia, con consecuencias de por vida para millones de adolescentes (EDUCO, 2024; CLADE, 2025; El País, 2025).

Este desafío se agrava tras el retiro abrupto de la cooperación estadounidense; la pausa en los fondos de USAID pone en riesgo la continuidad de programas educativos y de protección justo cuando más se necesita. En 2024, USAID destinó cerca de 2.300 millones de dólares a iniciativas en América Latina; una parte relevante de estos recursos sostenía programas de EeE y apoyo a jóvenes fuera del sistema escolar, y su suspensión afecta no sólo a la EeE, sino también el conjunto del sector educativo. En este contexto de brechas crecientes y financiamiento insuficiente, urge que la comunidad internacional y los donantes reconozcan la magnitud del reto, prioricen la EeE y contribuyan a construir respuestas flexibles, sostenibles y alineadas con las necesidades reales del territorio. Las páginas siguientes presentan argumentos, datos y voces que invitan a transformar la inercia en compromiso y la intención en acción inmediata y sostenida.

Ante estos retos, este documento hace suyas las demandas de abogar por políticas adaptativas, incrementar los compromisos financieros y fortalecer la cooperación internacional, incluyendo la responsabilidad de la comunidad de donantes. Se subraya que avanzar hacia una educación de calidad exige mucho más que inversión en infraestructura y salarios: requiere enfoques integrales que garanticen recursos pedagógicos, formación continua, inclusión y bienestar para toda la comunidad escolar. La escuela sólo podrá cumplir su función como espacio de protección y progreso si la comunidad internacional reconoce la urgencia, escala sus respuestas y prioriza el derecho a la educación en toda estrategia de acción humanitaria, desarrollo y construcción de paz.

CONTEXTO REGIONAL DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA

A nivel mundial, más de 234 millones de niñas, niños y adolescentes viven afectados por crisis prolongadas (ECW & CME, 2024). Entre ellos, las y los adolescentes en movilidad representan una fracción significativa cuya vulnerabilidad es extrema: enfrentan violencia, precariedad estructural, discriminación y falta de oportunidades educativas. Esta exclusión, además, se ve agravada por la carencia de datos consistentes y la débil acción estatal, generando un ciclo de invisibilidad que impide avances sustantivos en la garantía del derecho a la educación.

Si bien la educación está reconocida internacionalmente como un derecho fundamental -consagrado en marcos como los de la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención de los Derechos del Niño-, la realidad en muchos contextos es la interrupción sistemática de ese derecho debido a causas estructurales: pobreza, violencia, inestabilidad familiar y desigualdad de oportunidades. Esta desconexión entre el reconocimiento normativo y las condiciones vividas por adolescentes en movilidad evidencia la profundidad del problema.

En este contexto global, Centroamérica se distingue por crisis interrelacionadas y persistentes que afectan de manera particular el acceso y la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes. Las sociedades de El Salvador, Guatemala y Honduras enfrentan una compleja combinación de violencia generalizada, altos índices de criminalidad, pobreza estructural, debilidad institucional y un riesgo extremo frente a desastres provocados por fenómenos naturales: la región figura, de hecho, entre las más vulnerables del mundo según el Índice de Riesgo de Desastres Globales (Germanwatch, 2025). Dichas crisis, lejos de producirse por separado, se concatenan y retroalimentan, creando una espiral de exclusión, migración y desplazamiento forzado que condiciona gravemente las trayectorias educativas y de vida de la adolescencia centroamericana (véase cuadro 1 sobre las categorías de población desplazada).

Cuadro 1: Categorías de personas en situación de desplazamiento forzado (ACNUR)

Categoría	Descripción
Refugiados	Personas que han huido de su país de origen debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas.
Solicitantes de asilo	Personas que han solicitado protección internacional, pero cuya solicitud aún está pendiente de resolución.
Personas desplazadas internas (PDI)	Personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares por conflictos, violencia o desastres, pero que han permanecido dentro de las fronteras de su propio país.
Personas apátridas	Personas que no son consideradas como ciudadanos por ningún país y, por tanto, no tienen acceso a los derechos básicos que otorga la nacionalidad.
Otras categorías de interés del ACNUR	Incluyen grupos específicos como los venezolanos desplazados en el extranjero, personas que regresan a sus hogares (tanto refugiados como PDI) y las comunidades de acogida que brindan apoyo a las personas desplazadas.

Esta crisis sostenida configura un contexto que expulsa a cientos de miles de adolescentes y sus familias, obligándolos a migrar en busca de protección, mejores condiciones de vida y acceso a derechos básicos. En consecuencia, la movilidad humana y, en particular el desplazamiento forzado, adquieren un carácter estructural y recurrente, insertándose de manera transversal en las trayectorias vitales de adolescentes que enfrentan riesgos aumentados de interrupción escolar, inseguridad y exclusión social. Como resultado de esta dinámica, las oportunidades de desarrollo se ven severamente limitadas y el círculo de pobreza y exclusión educativa se perpetúa.

En este mismo escenario, la movilidad se ha convertido en parte integral del tejido social centroamericano. De hecho, cerca del 14% de quienes integran los flujos migratorios en la región son niñas, niños y adolescentes (ACNUR, OIM y UNICEF, 2025). Una proporción considerable de ellos se enfrenta, de manera cotidiana, a la interrupción escolar, el rezago educativo y a situaciones de violencia y exclusión. Es importante destacar que las niñas y adolescentes, en particular, afrontan riesgos aún mayores de violencia sexual, trata y explotación durante los trayectos migratorios, así como barreras más severas de acceso a la educación secundaria: la persistencia de normas de género restrictivas, el embarazo temprano y las responsabilidades de cuidado familiar limitan de manera significativa su permanencia escolar (Plan Internacional, 2024). Por todo ello, los sistemas sociales y educativos de El Salvador, Guatemala y Honduras permanecen inmersos en una emergencia sostenida, donde la exclusión educativa, la migración y el desplazamiento forzoso se retroalimentan y se agravan mutuamente (UNESCO, 2023; INEE, 2024).

Esta compleja realidad ejerce una presión multifactorial sobre los sistemas educativos nacionales que deben responder de manera simultánea al aumento de poblaciones desplazadas, a crisis humanitarias y climáticas y a la pobreza estructural persistente (UNESCO IIEP, 2024). Cabe señalar que ninguno de estos países alcanza el 6% del PIB recomendado para el sector educativo. En 2023, El Salvador y Guatemala destinaron apenas el 3,2%, mientras que Honduras dedicó un 4% (UNESCO, 2024; ASJ, 2025), concentrando la mayor parte del gasto en salarios y dejando sin recursos suficientes a programas psicosociales o de apoyo pedagógico. A pesar de esfuerzos como la matrícula gratuita, la merienda escolar y las mejoras en infraestructura, la cobertura educativa continúa disminuyendo y los indicadores de aprendizaje retroceden (ASJ, 2025). Este deterioro pone en riesgo tanto la equidad como la sostenibilidad del derecho a la educación.

Ejemplo de este impacto estructural es que, en Honduras, la cobertura educativa en el ciclo III (noveno grado) cayó al 45,5% en 2023, mientras que en educación media apenas alcanzó el 24,9%. Más de 846.000 niñas, niños y adolescentes (de 6 a 17 años) permanecieron fuera del sistema educativo ese año. En Guatemala, aunque la matrícula en preescolar aumentó un 13% y en primaria un 18% en 2023, la cobertura en secundaria sigue siendo menor al 30% y los avances no logran revertir la exclusión acumulada, especialmente entre adolescentes migrantes o residentes en zonas rurales. Además, permanece el desafío de un gasto público por estudiante que es uno de los más bajos en la región: en Guatemala, menos de 1.000 \$USD PPP anuales frente al promedio de 3.081\$ del resto de América Latina (BID y Red CLADE, 2023).

Esta situación se refleja también en el rendimiento académico. Por ejemplo, según el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de UNESCO, Guatemala ha retrocedido gravemente: el 60,7% de los estudiantes de tercer grado se encuentra en el nivel más bajo de desempeño en lectura, cuando el promedio regional es de 44,3%, y el 64% de sexto grado en matemáticas también está en el nivel más bajo de desempeño. El ERCE 2019-2023 evidencia además que Honduras y El Salvador presentan rezagos persistentes en aprendizajes básicos, con profundas brechas territoriales, socioeconómicas y étnicas, agravadas aún más por los efectos de la pandemia y el

deterioro sostenido en cobertura educativa (UNESCO-ERCE, 2019-2023).

Finalmente, los impactos se manifiestan de forma diversa en cada país: en El Salvador, la matrícula escolar se ha reducido debido a la migración, la baja natalidad y el abandono educativo; Guatemala enfrenta las mayores desigualdades urbano-rurales, con una cobertura secundaria inferior al 40% entre adolescentes de 12 a 16 años (Diálogo Interamericano, 2021); y Honduras muestra un descenso en la matrícula de secundaria, pasando de 584.617 estudiantes en 2021 a 570.863 en 2022 (Secretaría de Educación, 2022).

Tabla 1. Total de niñez y adolescencia (5-17 años) afectada por la crisis y el conflicto; porcentaje de niñez y adolescencia afectada fuera de la escuela; y número total fuera de la escuela en El Salvador, Guatemala y Honduras (ECW, 2025).

País	Total de niñez afectada por contextos de crisis y conflicto	Porcentaje de niñez afectada fuera de la escuela	Total de niñez fuera de la escuela
El Salvador	66.442	17,8%	11.816
Guatemala	690.917	9,2%	63.855
Honduras	491.172	18,4%	90.566

En este contexto, las y los adolescentes en movilidad enfrentan una auténtica carrera de obstáculos para acceder y mantenerse en la escuela secundaria. Entre las principales barreras destacan la inestabilidad residencial, la discriminación, el reconocimiento limitado de estudios previos y la ausencia de apoyos socioemocionales (UNESCO, 2022; UNESCO, 2024). Para las adolescentes, estas dificultades se agravan aún más por las violencias basadas en género, los estigmas sociales asociados a la maternidad temprana y la falta de entornos escolares seguros y sensibles al género, lo cual contribuye a su exclusión de la experiencia educativa continua (Spotlight Initiative, ONU Mujeres, 2022).

A este conjunto de retos se suman las respuestas institucionales, que siguen siendo fragmentadas y poco sostenibles, pues dependen principalmente de la cooperación multilateral y carecen de políticas nacionales flexibles e inclusivas. Así, se normaliza la exclusión escolar y se frena cualquier proceso real hacia una educación equitativa y de calidad, lo que perpetúa las desigualdades estructurales.

Además, a todo ello hay que sumarle los obstáculos que los actores locales tienen para ejercer un liderazgo responsable y sostenible, y su falta de participación en los espacios de gobernanza y apoyo sostenido para desarrollar sus capacidades institucionales. Esto se debe en parte al debilitamiento del tejido local como consecuencia de los modelos actuales de financiación humanitaria, de las barreras que las ONG locales tienen para operar, así como de los recortes de la ayuda que ponen en peligro aún más la sostenibilidad de las organizaciones.

Esta problemática se refleja cotidianamente en la experiencia de niñas, niños y adolescentes en desplazamiento: para ellos, el desplazamiento suele traducirse en ausentismo escolar, deserción y, sobre todo, rezago educativo, además de enfrentar numerosas barreras administrativas. El rezago educativo, definido como el desfase de dos o más años entre la edad y el grado escolar cursado, o la falta de conclusión de los niveles educativos obligatorios para su grupo etario no

solo implica limitaciones académicas, sino que tiene profundas consecuencias para el ejercicio de derechos de ciudadanía, la inserción laboral y el desarrollo de autonomía (Rueda Rodríguez, 2025; Banco Mundial, 2024). Los estudios demuestran que el rezago incrementa el riesgo de exclusión social, reduce las posibilidades de participación informada y activa, afecta el acceso al empleo digno y perpetúa el círculo intergeneracional de pobreza. Por tanto, superar el rezago educativo es clave para garantizar el desarrollo pleno y la integración social y laboral de las personas jóvenes, particularmente en contextos de alta movilidad humana y vulnerabilidad.

En definitiva, el conjunto de obstáculos escolares, sociales y administrativos que enfrentan las y los adolescentes en movilidad configura un escenario en el que la exclusión educativa y el rezago se traducen, no solo en limitaciones académicas, sino también en restricciones profundas para el ejercicio de los derechos de ciudadanía, la autonomía personal y la inserción laboral digna. A partir de este análisis, resulta indispensable examinar con mayor detalle las implicaciones concretas de la movilidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, así como los principales desafíos a afrontar en el marco de políticas inclusivas y estrategias de garantía de derechos.

Antes de abordar el apartado de desafíos, es fundamental precisar que el presente documento adopta como marco de referencia el enfoque del triple nexo. Esta estrategia integral conecta de manera coherente las acciones humanitarias, el desarrollo sostenible y la construcción de paz, promoviendo intervenciones coordinadas y sinérgicas que abordan tanto las necesidades inmediatas como las causas estructurales de la vulnerabilidad. Aplicado al contexto centroamericano, el triple nexo resulta clave para asegurar el derecho a la educación, la protección y el bienestar de los adolescentes en movilidad y en situación de riesgo, permitiendo respuestas que trascienden la habitual fragmentación sectorial y priorizan resultados colectivos sostenibles. La lógica y componentes específicos de este marco se detallan a continuación en el cuadro explicativo.

El triple nexo: una vía integral para garantizar educación, desarrollo y paz a adolescentes en movilidad.

En el marco de una realidad compleja, abordar los retos del acceso a la educación en El Salvador, Guatemala y Honduras, especialmente para adolescentes en movilidad, requiere avanzar hacia el enfoque del triple nexo. Este modelo integra simultáneamente tres dimensiones esenciales: la acción humanitaria, el desarrollo sostenible y la promoción de la paz. De este modo, no solo se atienden las urgencias propias de la educación en situaciones de emergencia, sino que se identifican los desafíos estructurales y se abren oportunidades para construir sistemas educativos más responsivos, inclusivos y resilientes en la región.

El triple nexo favorece una intervención coordinada: la dimensión humanitaria prioriza la respuesta rápida y segura ante crisis; la de desarrollo busca fortalecer capacidades y generar soluciones sostenibles; y la de paz impulsa la convivencia, la cohesión social y la reconciliación. Este enfoque orienta tanto el abordaje de las causas y consecuencias de la exclusión educativa, como la formulación de recomendaciones concretas para los tres países.

A continuación, se describe de manera precisa cómo cada dimensión aporta soluciones específicas para que ningún adolescente en movilidad quede privado de su derecho a la educación.

Educación en emergencias: la puerta a la resiliencia.

En Centroamérica, la educación en emergencias se ha consolidado como la principal estrategia para preservar derechos, restaurar la dignidad y aportar estabilidad mínima a adolescentes desplazados y migrantes. Ante crisis persistentes como la violencia, los desastres por

fenómenos naturales, la pobreza y las fracturas sociales, la escolarización se convierte en un proceso fragmentado, con interrupciones ajenas al control de las familias y jóvenes (UNESCO, 2025; Humanitarian Action, 2023).

Las intervenciones humanitarias en el ámbito educativo buscan no solo mantener la continuidad escolar en situaciones críticas, sino también ofrecer apoyos psicosociales focalizados, particularmente en el nivel secundario. No obstante, identificar y registrar a las y los adolescentes afectados sigue siendo un desafío central: sin datos desagregados y sistemas de monitoreo eficaces, la exclusión persiste y la capacidad de formular políticas basadas en evidencia queda limitada.

Desarrollo: romper el ciclo mediante educación inclusiva y de calidad.

El segundo pilar del triple nexo, el desarrollo, implica superar las respuestas reactivas y construir políticas educativas que transformen la educación en un motor estructural contra la desigualdad y la movilidad forzada en Centroamérica. Esto significa pasar de intervenciones sectorizadas de emergencia a estrategias de largo plazo centradas en fortalecer sistemas resilientes y adaptativos, capaces de responder a causas raíz como la desigualdad, la falta de oportunidades, la debilidad institucional y las políticas migratorias ineficaces. Para lograr inclusión y reintegración sostenibles, se requieren modelos educativos flexibles, programas de nivelación, atención psicosocial, infraestructura adecuada y financiamiento continuo. En especial, invertir en secundaria y formación técnico-profesional, y otros modelos educativos para transicionar al mundo laboral, profesionalizar a los docentes y adoptar enfoques interseccionales como de género, interculturalidad y protección, son pasos esenciales para quebrar los ciclos de pobreza y exclusión que afectan a generaciones enteras (IECAH, 2022).

Paz: educación para la convivencia y la reconciliación.

El tercer pilar del triple nexo, la paz, debe entenderse no sólo como la ausencia de violencia, sino como la presencia activa de condiciones que permitan la convivencia, la justicia y el respeto pleno de derechos para adolescentes y comunidades. La educación para la paz implica intervenir sobre factores de riesgo y garantizar entornos escolares protectores, inclusivos y seguros, donde la diversidad se valore como riqueza y no origine discriminación ni exclusión. Las crisis recurrentes y emergencias encadenadas favorecen el reclutamiento de jóvenes por grupos armados y perpetúan ciclos de violencia y migración forzada. Por ello, la escuela debe convertirse en un auténtico espacio de prevención, reconciliación y restauración de lazos sociales, un objetivo que sólo puede lograrse mediante coordinación intersectorial y servicios integrados de protección, atención psicosocial y desarrollo comunitario (UNDP, 2025).

Implicaciones del triple nexo: desafíos y vías de acción.

Los sistemas educativos, sociales y de protección en El Salvador, Guatemala y Honduras operan bajo presión extrema: deben atender urgencias, planificar para el desarrollo y contribuir a la paz social en medio de crisis prolongadas. Esta complejidad se agrava cuando la invisibilidad estadística de adolescentes en movilidad impide responder de manera eficaz y sostenible (UNESCO, 2025; INEE, s.f.). El triple nexo exige renovar modelos de gobernanza, coordinación y financiamiento, superando las barreras entre actores humanitarios, estatales, sociedad civil y comunidades.

Resulta indispensable entonces:

- ✓ Renovar modelos de gobernanza, coordinación y financiación, superando las barreras tradicionales entre actores humanitarios, sectores estatales, sociedad civil y comunidades.
- ✓ Los países requieren sistemas robustos para identificar adolescentes migrantes y retornados, y adaptar la respuesta educativa a la realidad cambiante y multidimensional de la emergencia.
- ✓ El financiamiento multianual, la descentralización y la participación activa de los propios adolescentes y sus familias aparecen como condiciones indispensables para lograr un impacto duradero.
- ✓ Integrar un sistema de indicadores de protección, desarrollo y paz en todo el proceso de planificación educativa.

Solo con estos pilares se logrará un impacto duradero que garantice el derecho a la educación en contextos de emergencia y allane el camino hacia la resiliencia y el desarrollo social.

MOVILIDAD Y ACCESO A LA EDUCACIÓN: PRINCIPALES DESAFÍOS Y CONSECUENCIAS

La movilidad humana en Centroamérica se ha consolidado como uno de los mayores retos para la garantía del derecho a la educación de las y los adolescentes. Más allá de ser un fenómeno demográfico, la migración forzada y el desplazamiento interno actúan como factores estructurales que profundizan las brechas educativas y limitan el ejercicio de derechos fundamentales. En un contexto donde las trayectorias escolares se ven interrumpidas, el acceso y permanencia en la escuela secundaria se convierten en desafíos cotidianos para quienes viven en situación de movilidad, lo que exige respuestas institucionales precisas y adaptadas a la complejidad del entorno regional.

Desafío 1

Fortalecer la coordinación institucional y mejorar la disponibilidad y el acceso a información confiable

Uno de los principales limitantes para la garantía educativa de adolescentes en movilidad es la persistente falta de datos confiables y la escasa coordinación entre los sistemas de protección, migración y educación. Esta brecha institucional dificulta tanto la identificación como la atención diferenciada de quienes enfrentan desplazamiento, generando respuestas inconexas y perpetuando la exclusión escolar. Sumado a ello, la presencia de requisitos documentales inalcanzables y barreras administrativas, junto con limitaciones económicas, violencia recurrente y ausencia de programas de nivelación y atención psicosocial, contribuyen a un ciclo de rezago y abandono escolar que persiste sin solución efectiva en la región. (BID, 2023).

El sistema educativo, particularmente en el nivel secundario, aún no está preparado para integrar eficazmente a la población migrante y desplazada, lo que prolonga las brechas de protección y exclusión. Ejemplo de ello es el testimonio de un joven salvadoreño:

“Yo no podía estudiar en el lugar que quería porque era territorio contrario; estudiaba en la noche porque trabajaba de día, y aún así, había que sobrevivir. En las colonias olvidadas, el peligro era parte de la vida cotidiana. De repente, la escuela cerró por inseguridad y dejé de estudiar en séptimo grado. Después intenté volver, pero la única opción estaba más lejos, y el temor persistía... la violencia nos hizo huir y buscar nuevas oportunidades, incluso fuera del país.” (Adolescente, El Salvador, 2025)

La falta de registros consolidados, fiables y actualizados dificulta dimensionar el verdadero alcance del desplazamiento en la niñez y adolescencia centroamericana. Los datos existentes suelen ser parciales, poco sistemáticos y frecuentemente no permiten distinguir entre las distintas categorías de desplazados (internos, refugiados, retornados o migrantes en tránsito), lo que genera subregistro y limita la capacidad de respuesta coordinada frente a los múltiples impactos del desplazamiento forzado en la protección y las oportunidades educativas. Por ejemplo, entre enero y agosto de 2024, más de 108.000 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron registrados o detenidos en México, la mayoría provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras (Unidad de Política Migratoria, 2025). En Honduras, más de 128.000 niñas y niños han sido registrados

como retornados entre 2014 y agosto de 2025 (COIPRODEN, 2025); sin embargo, estos datos no reflejan la totalidad de desplazados internos, que suelen ser la categoría menos documentada y visibilizada (MIRPS, 2024; ACNUR, 2023).

Esta ausencia de información educativa sistemática sobre la niñez y adolescencia migrante amerita una mayor voluntad política y acciones gubernamentales coordinadas en la región. La falta de datos se traduce así en la imposibilidad de diseñar políticas públicas informadas e identificar las brechas estructurales que deben abordarse para garantizar el derecho a la educación de estos adolescentes (UNESCO, 2024). Como resultado, el fenómeno permanece invisible, perpetuando la falta de recursos y respuestas internacionales ante una problemática que es, al mismo tiempo, estructural y agravada por crisis multicausales.

“No existe un registro preciso de adolescentes retornados en el país. Los datos públicos sobre movilidad y exclusión educativa suelen ser incompletos o no reflejan la realidad, lo que dificulta dimensionar y atender la magnitud de las necesidades humanitarias”. (Actor clave, El Salvador, 2025)

Desafío 2

Apoyar y promover la planificación de una oferta educativa de calidad

Uno de los efectos más inmediatos de la movilidad interna, el desplazamiento y los retornos forzados es la **constante dificultad de los sistemas educativos para anticipar, dimensionar y planificar adecuadamente los recursos, el personal, la infraestructura y los programas de continuidad escolar o nivelación** (UNESCO, 2024). Al no poder prever cuántos adolescentes y familias van a necesitar atención en un momento dado, la oferta educativa resulta insuficiente, rígida y con enormes brechas territoriales. Así lo ilustra un informante clave:

“El sistema nacional de protección atiende a la población que busca los servicios, no necesariamente a la que está ya en el territorio”. (informante clave, El Salvador, 2025)

Este obstáculo se ve agravado por la dispersión y fragmentación de competencias entre actores estatales y sociales y por la falta de coordinación efectiva entre los sistemas de protección social, migración y educación. La ausencia de información robusta, comparativa y actualizada sobre cuántos adolescentes se ven afectados por desplazamiento, migración y las distintas crisis en la región impide formular políticas focalizadas y eficaces, tanto para la prevención de la exclusión como para la garantía de reinserción escolar. La voz de una joven retornada ilustra la magnitud del vacío de acompañamiento institucional:

“Nadie nos ayudó cuando regresamos, tuvimos que preguntar todo y ver por nuestra cuenta cómo inscribirnos en la escuela de nuevo.” (Adolescente mujer salvadoreña de 14 años, retornada desde México, 2025)

La falta de planificación sensible a la crisis y de coordinación intersectorial deja a miles de adolescentes migrantes, desplazados y retornados sin acceso real a programas de nivelación, orientación ni apoyo psicosocial, perpetuando el ciclo de rezago y fragilidad educativa que afecta a las sociedades centroamericanas en su conjunto.

Una de las consecuencias más notables de la movilidad y la pobreza en El Salvador, Guatemala y Honduras es la precariedad y fragmentación en la atención psicosocial y en los procesos de reconocimiento académico para adolescentes migrantes, retornados y desplazados. Según datos recientes, el 63 % de la población hondureña (Instituto Nacional de Estadística, 2024) y el 56% de la población guatemalteca vive en pobreza (ENCOVI, 2023) y, en El Salvador, el 30.3% de la población enfrenta pobreza (Banco Mundial, 2024). La pobreza, asociada a dinámicas de violencia y desplazamiento, impacta directamente en la salud mental, el bienestar y las oportunidades educativas de la adolescencia.

La exposición a violencia, abuso y discriminación es especialmente grave para las adolescentes: en El Salvador, seis de cada diez mujeres adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en 2024, afectando principalmente al grupo de 15 a 19 años (ODU y ORMUSA, 2024). Sin mecanismos de acompañamiento psicológico en las escuelas, muchos adolescentes desarrollan apatía, retraimiento y abandono escolar. Como reporta un director de escuela de El Salvador:

“Muchos ya no quieren ni socializar ni asistir a la escuela.” (Director de escuela, El Salvador, 2025)

La carencia de equipos de apoyo multidisciplinario y la formación insuficiente en trauma y acompañamiento por parte de los equipos docentes profundizan la exclusión y los rezagos. Numerosas voces expertas y testimonios coinciden en que **invertir en atención psicosocial con enfoque de derechos es clave para la retención escolar y la reintegración educativa**.

A esta situación se añade la limitada capacidad de los sistemas educativos para garantizar procesos ágiles y humanizados de reintegración escolar para adolescentes desplazados o retornados, así como el reconocimiento de estudios previos realizados en el extranjero. Persisten trabas administrativas como la exigencia de documentos imposibles de recuperar tras el desplazamiento y pruebas de suficiencia para validar conocimientos, que en la práctica excluyen a quienes más lo necesitan (MIRPS, 2023; World Refugee Migration Council y OIM, 2021).

Si bien los desafíos identificados, tales como la necesidad de fortalecer la articulación institucional, la implementación de mecanismos de planificación adaptables y la ampliación de la atención psicosocial, delinean el marco estructural que condiciona el acceso y permanencia educativa para adolescentes en movilidad, es al nivel de la experiencia cotidiana donde dichos desafíos se traducen en barreras muy concretas. Estos desafíos, que operan en los propios centros educativos y entornos familiares y comunitarios, dificultan de manera inmediata la reintegración escolar y la continuidad educativa de quienes regresan, se desplazan o transitan por la región.

Los principales obstáculos que enfrentan las y los adolescentes para asegurar, en la práctica, su derecho a la educación y a trayectorias dignas de desarrollo y protección son;

- **Requisitos documentales** imposibles de acreditar tras el desplazamiento, dificultando la matrícula y la continuidad escolar.
- **Limitaciones económicas**, como la falta de recursos para transporte, alimentación y útiles.
- **Violencia estructural, comunitaria y de género**, que restringe la movilidad o genera nuevas causas de abandono.

- **Falta de programas de nivelación sistemáticos**, lo que conlleva rezago académico, frustración y alto riesgo de abandono, especialmente al no recibir apoyo diferenciado.
- **Escasez de atención psicosocial**; los centros cuentan con pocos recursos humanos especializados, lo que agrava la desmotivación y los procesos emocionales no resueltos tras experiencias de violencia o migración forzada.

El panorama es todavía más desafiante en secundaria: estudios recientes muestran que **hasta dos tercios de los adolescentes entre 12 y 17 años no cumplen la escolaridad mínima**, y enfrentan una alta probabilidad de abandono como consecuencia del rezago acumulado, la presión económica y la ausencia de programas de acompañamiento (MIRPS, 2025; Plan Internacional, 2023).

Respecto a El Salvador, si bien las tasas oficiales de reinserción escolar tras el retorno suelen ser superiores en comparación con Honduras y Guatemala -por ejemplo, el Ministerio de Educación informó porcentajes de reinscripción cercanos al 60% en algunos departamentos (MIRPS, 2025)-, estas cifras reflejan en su mayoría la matrícula formal, pero no garantizan la calidad real del retorno escolar. Esta calidad se entiende como la estabilidad en las trayectorias educativas, el acompañamiento psicosocial, la permanencia en la misma escuela y la ausencia de discriminación persistente. De hecho, tanto en El Salvador como en los demás países, diversos informes cualitativos y testimonios recopilados por organismos internacionales evidencian que **reintegrarse no significa permanencia efectiva ni logro pleno en aprendizaje**: muchos jóvenes retornados experimentan trayectorias inestables, frecuentes cambios de escuela y discriminación, y enfrentan altas tasas de abandono al cabo de un ciclo lectivo (UNESCO, 2024; Plan Internacional, 2023).

“no hay registro de desplazamiento forzado interno... cuando las niñas, niños y adolescentes se logran reincorporar... no existen mecanismos para que se puedan poner al día con sus pares, sobrecargándolos académicamente en muchos casos y rezagándolos por la vía de los hechos”. (Actor clave, El Salvador, 2025)

La fragmentación institucional constituye un obstáculo clave para la reincorporación y permanencia escolar de adolescentes migrantes y retornados, profundizando el rezago y la discriminación, especialmente en el nivel secundario (OIM, 2023). La poca flexibilidad de los procesos de matrícula y evaluación, junto a la falta de protocolos nacionales claros para certificar estudios previos, expone a estudiantes en movilidad a una doble carga: por un lado, enfrentan la imposibilidad de acreditar escolaridad o son ubicados en grados inferiores a su edad, lo que incentiva el abandono y el estigma; por otro, la ausencia de programas sistemáticos de nivelación, acompañamiento psicosocial y apoyos individualizados impide recuperar trayectorias educativas, sobre todo en zonas rurales y hogares desintegrados.

“Me sentí mal cuando me dijeron que tendría que volver a tercer grado, aunque yo tenía 15 años. Me daba pena ir a esa clase con niños pequeños. No trajimos los papeles de allá y solo me dejaron hacer pruebas de suficiencia. Y todavía sigo intentando pasar los exámenes para ponerme al día.” (Adolescente retornada, El Salvador, 2025)

A ello se suman factores económicos como el costo del transporte, materiales y tecnología, así como carencias en infraestructura, conectividad y oferta extracurricular, que en conjunto agravan la brecha de acceso y permanencia y refuerzan la desigualdad entre adolescentes en movilidad y sus pares (MIRPS, 2023; Plan Internacional, 2025). En este contexto, la falta de articulación estatal y social desacelera cualquier intento de inclusión genuina y limita la garantía real del derecho a la educación para esta población.

Consecuencias estructurales: calidad, equidad y exclusión educativa

Las consecuencias para los países de la región son profundas y multidimensionales: la falta de coordinación institucional, las dificultades para planificar la oferta escolar, la fragmentación en la atención psicosocial y educativa y la exacerbación de la marginación rural, de género y etaria debilitan significativamente el acceso universal y la equidad en la educación (UNESCO, 2023; UNICEF, 2024). Lejos de ser meros espacios de resguardo, las escuelas enfrentan el reto de convertirse realmente en entornos de calidad, donde la adaptabilidad y aceptabilidad de la oferta educativa respondan a los contextos, trayectorias y necesidades de quienes regresan o se desplazan. Cuando esto no ocurre, la frustración por la falta de nivelación, el rezago y la ausencia de acompañamiento conlleva a nuevos traumas, estigmas y un aumento del abandono temprano.

La concatenación de emergencias y carencias estructurales genera un contexto donde la estabilidad educativa se encuentra lejos del alcance de miles de adolescentes en movilidad. Esto profundiza las brechas y condena a una franja crucial de la juventud centroamericana a la marginalidad y vulnerabilidad extremas (UNICEF, 2024; INEE, 2024). **Si no se transforma el modelo educativo para priorizar la calidad entendida como pertinencia, flexibilidad, adaptabilidad, seguridad y acompañamiento diferenciado, la escuela puede contribuir más a la exclusión que a la equidad y el desarrollo.**

“En la escuela era como el lugar más seguro dentro de la colonia, prefería estar ahí porque los compañeros eran más sanos. Pero a veces teníamos miedo. La violencia estaba afuera y también dentro, con compañeros que a veces llevaban problemas al aula.” (Egresado joven de contexto de violencia urbana, El Salvador 2025)

Frente a este panorama de consecuencias estructurales donde la calidad educativa, la equidad y la inclusión se ven comprometidas, resulta imprescindible avanzar hacia soluciones que trasciendan la cobertura y respondan de forma específica a las realidades de la adolescencia en movilidad. La experiencia escolar solo se convierte en un verdadero factor de protección cuando garantiza calidad en todas sus dimensiones: adaptabilidad de los contenidos y métodos, aceptabilidad en términos de pertinencia, respeto a la diversidad y ausencia de discriminación, y especial atención al acompañamiento pedagógico y emocional. Cuando la educación formal no cumple con estos criterios, no solo aumenta el riesgo de abandono temprano y rezago, sino que empuja a las y los adolescentes a trayectorias trucas y a la reproducción de ciclos de exclusión.

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones centradas en transformar la respuesta educativa desde un enfoque de derechos, haciendo énfasis en la adecuación, flexibilidad y pertinencia de la oferta escolar para quienes más lo necesitan.

RECOMENDACIONES PARA UNA RESPUESTA EDUCATIVA INTEGRAL

La crisis educativa en Centroamérica, agravada por emergencias prolongadas y por crisis migratorias, sociales y climáticas interconectadas, constituye un desafío estructural de primer orden. Adolescentes desplazados, refugiados y retornados, enfrentan múltiples obstáculos para acceder y permanecer en la educación secundaria debido a la fragilidad institucional, los déficits de financiamiento y las políticas migratorias restrictivas que, tanto en los países de tránsito como de destino, condicionan sus trayectorias y limitan sus oportunidades, ya sea al cruzar México rumbo a Estados Unidos o al desplazarse hacia el sur del continente. La exclusión educativa de esta población perpetúa desigualdades, erosiona la cohesión social y vulnera compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Frente a ello, resulta urgente situar la educación como eje estratégico de cualquier respuesta humanitaria y de desarrollo. **La “crisis silenciosa” que vive la educación en la región exige una acción decidida para alinear la financiación con la magnitud del reto, garantizando calidad, equidad y resiliencia.** La reducción reciente de fondos de cooperación y la falta de mecanismos efectivos de reintegración escolar amenazan con truncar el derecho a la educación y consolidar las trayectorias de exclusión de miles de adolescentes en movilidad.

En este escenario, la cooperación multilateral y los donantes internacionales deben asumir un papel activo y corresponsable en el cierre de brechas de cobertura y en la adaptación de la oferta educativa a contextos de emergencia y movilidad. Pero la responsabilidad última recae en los Estados, llamados a fortalecer sus sistemas públicos, garantizar la coordinación intersectorial y cumplir los compromisos internacionales asumidos. Invertir en Educación en Emergencias no es solo una respuesta coyuntural: es una inversión estratégica en capital humano, cohesión social y paz duradera para la región.

Como antesala de las recomendaciones sugeridas por el presente informe, cabe hacer mención de algunos de los testimonios esclarecedores recopilados de organizaciones locales, directores, y las y los mismos adolescentes y sus familias, los cuales hacen especial énfasis en la necesidad de:

- Implementar sistemas de identificación y registro efectivos coordinados e integrados entre los sistemas de educación, migración y protección social.
- Coordinación intersectorial entre educación, protección, migración, salud y empleo.
- Ampliar modalidades flexibles y aceleradas, simplificar inscripción, adaptar currículos y validar aprendizajes previos.
- Financiar becas para transporte, acceso a tecnología y materiales; invertir en infraestructura y acceso a tecnología.
- Promover participación de adolescentes y familias en la vida escolar, el diseño de políticas y la vigilancia social para fortalecer ambientes escolares protectores y resilientes.

A continuación se presentan recomendaciones orientadas a reforzar la respuesta educativa en contextos de emergencia y movilidad, poniendo especial atención a la diversidad de trayectorias y necesidades de adolescentes en movilidad cuya situación varía según país, género, origen étnico, situación socioeconómica, condición de discapacidad y contexto migratorio, articulando

esfuerzos entre Estados, organismos multilaterales, donantes y actores locales para garantizar una educación inclusiva, sostenible y de calidad para toda la adolescencia en la región.

Compromiso de la cooperación multilateral y donantes:

La cooperación internacional debe priorizar el financiamiento plurianual, directo y flexible que permita adaptar las respuestas educativas a las realidades diferenciadas de adolescentes según género, origen étnico, condición de discapacidad y contexto territorial.

Se recomienda:

- Integrar la financiación educativa en los marcos de cooperación humanitaria, de migración y de acción climática, vinculando explícitamente el compromiso internacional de destinar al menos el 10% de la ayuda humanitaria total a educación (CME, 2025), y asegurando mecanismos de supervisión que vayan más allá del acceso para medir calidad, seguridad, equidad y bienestar.
- Priorizar mecanismos y fondos que lleguen de forma directa a actores locales, permitiendo que organizaciones de base, incluidas las lideradas por mujeres y jóvenes, lideren la implementación y garanticen la adecuación sociocultural.
- Canalizar fondos para apoyar sistemas de identificación y monitoreo desagregados, que aseguren la generación y socialización de evidencia y buenas prácticas desagregadas por género y territorio, impulsando aprendizajes y ajustes continuos desde la diversidad regional.
- Invertir en infraestructura educativa resiliente en línea con el Marco Integral de Escuelas Seguras de GADRRES que aseguren el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales, violencias y cualquier tipo de riesgos.

Liderazgo de los Estados:

Los gobiernos deben asumir el liderazgo en el fortalecimiento de marcos legales, institucionales y financieros que prioricen la inclusión de adolescentes en movilidad, con perspectiva de género y localización. Su papel es garantizar la articulación intersectorial y la participación real de las comunidades y de las y los adolescentes en la gestión educativa.

Se recomienda:

- Asegurar sistemas de identificación y registro integrados entre educación, protección, migración, salud y empleo, con información desagregada que permita atención personalizada y diferenciada.
- Aumentar los fondos destinados a la educación bajo un enfoque de calidad y protección para generar sistemas con capacidad para incluir a todos los diversos colectivos de alumnado en desplazamiento.
- Adaptar el enfoque del triple nexo a su contexto, consolidando la educación en emergencias como catalizadora de resiliencia, cohesión social y paz, y vinculando protección, bienestar y educación en la armonización de protocolos para reintegración y reconocimiento de estudios previos.

- Garantizar mesas técnicas y espacios de articulación a nivel nacional y regional, priorizando la participación de las y los adolescentes, especialmente mujeres, indígenas y jóvenes con discapacidad, en la formulación de políticas.
- Ampliar y flexibilizar modalidades educativas (presenciales, a distancia, aceleradas) y el acompañamiento psicosocial, con inversión sostenida en formación docente basada en inclusión, diversidad y derechos humanos.
- Invertir en escuelas resilientes y adaptadas a eventuales crisis en línea con el enfoque de todos los peligros del Marco Integral de Escuelas Seguras.

Participación y articulación de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales

La sociedad civil local, nacional e internacional, incluidas organizaciones de base, redes, plataformas regionales e internacionales y ONG, deben desempeñar un papel proactivo en la formulación, implementación y vigilancia de las respuestas educativas para adolescentes en movilidad. Es fundamental promover la localización entendida como empoderamiento real y la transversalización del enfoque de género e interseccionalidad en todas las fases de la intervención.

Se recomienda:

- Liderar y abogar por estrategias educativas adaptadas al territorio y al contexto de los y las adolescentes en movilidad, priorizando el liderazgo de actores locales, comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad y juventudes.
- Participar de manera integral en la gobernanza educativa, asegurando que las organizaciones nacionales y locales no sean solo ejecutoras, sino actores clave en la toma de decisiones, el monitoreo y la evaluación.
- Buscar y fomentar espacios de coordinación entre educación, protección, salud, empleo y migración a través de mesas técnicas nacionales y regionales que prioricen a la adolescencia en movilidad.
- Fortalecer redes comunitarias y modelos de acompañamiento social que prioricen el bienestar psicosocial, la protección, la resiliencia y la permanencia educativa, diseñando intervenciones y pilotajes que respondan a barreras específicas de género, origen étnico, situación migratoria y discapacidad.
- Generar, sistematizar y compartir evidencia, testimonios y análisis sobre exclusión y trayectorias de integración educativa en movilidad, usando datos desagregados para incidir en políticas públicas, sensibilizar a la cooperación internacional y mejorar la rendición de cuentas.
- Impulsar procesos formativos y campañas de sensibilización docente, escolar y comunitaria en diversidad, enfoques de género y derechos humanos, identificando y replicando buenas prácticas y estrategias exitosas en distintos contextos nacionales e internacionales.
- Fomentar alianzas sólidas entre sociedad civil, organismos multilaterales, gobiernos y sector privado para escalar soluciones innovadoras, sostenibles y culturalmente pertinentes, promoviendo que la localización y la equidad de género sean criterios centrales en la asignación de recursos y el diseño de los programas.

Hacia una agenda compartida: principios y compromisos transversales

La sostenibilidad educativa en Centroamérica exige que Estados, cooperación internacional y sociedad civil coordinen esfuerzos, activando mecanismos flexibles y plurianuales de financiamiento articulados con el triple nexo. El acceso directo de fondos a actores locales, sobre todo aquellos liderados por mujeres y comunidades, asegura intervenciones ágiles y pertinentes que puedan responder a las necesidades específicas de adolescentes en movilidad, reduciendo barreras y fortaleciendo la equidad en el uso y supervisión de recursos.

La coordinación efectiva entre sectores es esencial para garantizar respuestas educativas inclusivas y pertinentes. Esto implica vincular esfuerzos, compartir información y adaptar procedimientos, de modo que la atención se ajuste a las particularidades de las y los adolescentes en movilidad, considerando género, discapacidad, origen y contexto. Consolidar la participación real de actores locales y de las y los propios adolescentes, tanto en la gestión escolar como en la elaboración de políticas, fortalece la resiliencia y la cohesión social en la región.

En cuanto a calidad y bienestar educativo, el compromiso conjunto de todos los actores debe centrarse en la diversificación de modalidades de aprendizaje, la mejora de infraestructura y la formación docente sensible a derechos y diversidad. Sólo con indicadores claros de inclusión, participación y bienestar se puede asegurar que los beneficios lleguen prioritariamente a quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer su derecho a la educación.

Para lograr que estas recomendaciones se traduzcan en cambios reales, resulta fundamental que los Estados, los actores locales, la sociedad civil y los donantes actúen con decisión y corresponsabilidad, priorizando acciones estructurales y sostenibles, respaldadas por mecanismos efectivos de financiamiento, supervisión y adaptación a la diversidad de las y los adolescentes en movilidad. Solo mediante una cooperación multilateral activa centrada en y, a ser posible, liderada por los actores locales, así como mediante una voluntad política renovada, será posible construir sistemas educativos verdaderamente inclusivos, seguros y resilientes, que garanticen oportunidades, restituyan derechos y fortalezcan la cohesión social en la región.



La evidencia recogida a lo largo de este informe confirma que el acceso a la educación de adolescentes en movilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras enfrenta desafíos estructurales, alimentados tanto por emergencias recurrentes como por la continuidad de desigualdades, falta de coordinación interinstitucional y rezagos históricos en políticas públicas. A pesar de avances puntuales, persisten brechas críticas en registro, inclusión, infraestructura y financiamiento que perpetúan la exclusión de quienes deberían estar en el centro de las prioridades educativas.

Como se ha evidenciado antes, la invisibilidad y fragmentación institucional sólo puede superarse con una apuesta integral: datos que sean confiables, articulación interinstitucional efectiva, inversión sostenida, y respuestas oportunas a todas y todos los adolescentes que viven la movilidad como parte de su trayectoria personal y educativa.

La movilidad agudiza las brechas de acceso y permanencia escolar, especialmente para quienes migran, son desplazados o retornados y requieren modalidades flexibles, reconocimiento de trayectorias previas y apoyo socioemocional. La exclusión de estos grupos, por lo tanto, representa no sólo una violación del derecho a la educación, sino también un obstáculo para el desarrollo colectivo, la equidad regional y la paz.

El análisis del triple nexo: humanitario, desarrollo y paz, permite visualizar que ninguna intervención parcial es suficiente para responder a la magnitud del reto. La educación en situaciones de emergencia es indispensable para garantizar protección inmediata, continuidad del aprendizaje y apoyo psicosocial; sin embargo, su alcance es limitado si no se articula con estrategias de desarrollo sostenibles, centradas en sistemas educativos inclusivos, inversiones en secundaria y educación técnica, y una apuesta por formación docente centrada en enfoques interseccionales. La dimensión de paz incorpora la urgencia de que la escuela sea espacio de protección, reconciliación y cohesión social, capaz de romper ciclos de violencia y migración forzada.

Romper la fragmentación entre sectores, superar la invisibilidad estadística y poner a la adolescencia en movilidad en el centro requiere coordinación real entre los actores humanitarios, de desarrollo y de la sociedad civil, así como voluntad política sostenida y recursos alineados con el tamaño del desafío. Los sistemas educativos sólo serán resilientes y transformadores si se fortalecen marcos legales y financieros, se invierte en infraestructura y capital humano, y se garantiza acceso a programas flexibles y atención psicosocial permanente.

Garantizar el derecho a la educación de adolescentes en movilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras no es solo una prioridad regional de Derechos Humanos, sino una condición estratégica para romper los ciclos de exclusión, violencia y desplazamiento. Adoptar el enfoque del triple nexo es esencial para diseñar políticas y acciones que superen la respuesta reactiva y apuesten por soluciones estructurales, inclusivas y sostenibles que devuelvan a la región la posibilidad de imaginar un futuro más equitativo y pacífico para las generaciones presentes y futuras.

En suma, **el desafío ya no es solo responder a la emergencia, sino transformar los sistemas educativos para que sean capaces de articular la respuesta inmediata, el desarrollo sostenible y la cohesión social.**

Sin reformas profundas, el riesgo es la cronificación generacional de la vulnerabilidad, dejando a familias y comunidades atrapadas en un ciclo de pobreza y movilidad forzada.

La sostenibilidad de cualquier respuesta depende de la construcción de sistemas intersectoriales resilientes centrados en los y las adolescentes: articulación entre educación, protección, salud, empleo y justicia; consolidación de sistemas de datos desagregados y actualizados; desarrollo de normativas flexibles para la reintegración escolar y la nivelación académica; y creación de incentivos reales (becas, apoyo psicosocial, conectividad) para la permanencia y éxito escolar. Sólo estos esfuerzos, anclados en el sistema y las políticas públicas, y apoyados por la cooperación multilateral y el liderazgo de la sociedad civil, pueden hacer frente a las emergencias que nunca terminan, sino que se acumulan y profundizan su impacto.

ACNUR. (2024). Educación. <https://www.acnur.org/educacion>

ACNUR, OIM & UNICEF. (2025, marzo 6). ACNUR, OIM y UNICEF refuerzan su compromiso con la niñez migrante y refugiada en México.

<https://www.acnur.org/mx/noticias/comunicados-de-prensa/acnur-oim-y-unicef-refuerzan-su-compromiso-con-la-ninez-migrante-y>

ACNUR. (2016). *Educación en Emergencias. El Salvador, Guatemala y Honduras. Boletín #1 (Enero - Septiembre 2016)*. ACNUR.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/Boletin01_2016_TNCA.pdf

AECID. (s.f.). *El enfoque del triple nexa humanitario-desarrollo-paz*. Recuperado de

<https://www.a-humanitaria.es/AECID/nexo.html>

Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). (2023, 25 octubre). Cobertura educativa incrementó significativamente en 2023.

<https://agn.gt/cobertura-educativa-incremento-significativamente-en-2023/>

Arias Ortiz, E., Giambruno, C., Morduchowicz, A., & Pineda, B. (2023). *El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2023* (Nota Técnica No. IDB-TN-02708). Banco Interamericano de Desarrollo.

<https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-estado-de-la-educacion-en-America-Latina-y-el-Caribe-2023.pdf>

Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). (2025). *Boletín EDP Educación 2025*. Estado de País.

<https://estadodepais.asjhonduras.com/wp-content/uploads/2025/EDP/EDUCACION/Boletín%20EDP%20Educación%202025.pdf>

Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). (2023). Estado de País Educación - 2023

(Presentación PowerPoint). <https://asjhonduras.com/webhn/wp-content/uploads/2023/02/PPT-Estado-de-Pais-Educacion-2023.pdf>

Banco Interamericano de Desarrollo. (2018, junio 27). Abandono escolar: el reto pendiente de Mesoamérica.

<https://www.iadb.org/es/historia/abandono-escolar-el-reto-pendiente-de-mesoamerica>

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2023). *Migración y educación: Desafíos y oportunidades*.

<https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Migracion-y-educacion-desafios-y-oportunidades.pdf>

Banco Interamericano de Desarrollo. (2023). El estado de la educación en América Latina y el Caribe.

<https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-estado-de-la-educacion-en-America-Latina-y-el-Caribe-2023.pdf>

Banco Mundial. (2024, 31 enero). Rezago educativo pone en jaque el crecimiento de América Latina y el Caribe.
<https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2024/01/31/rezago-educativo-crecimiento-america-latina-caribe>

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). (2025). *Educación en emergencias y crisis*.
<https://redclade.org/nuestras-causas/educacion-en-emergencias-y-crisis/>

Campaña Mundial por la Educación (CME). (2025, 24 de enero). *Día Internacional de la Educación: Urge priorizar la educación en emergencias*.
<https://cme-espana.org/2025/01/24/dia-internacional-de-la-educacion-urge-priorizar-la-educacion-en-emergencias/>

Carta - educación en emergencias. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). (2025). *Carta por el derecho a la educación en situaciones de emergencia*.
<https://redclade.org/wp-content/uploads/2025/02/carta-educacion-en-emergencias.pdf>

Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN). (2025, 2 de septiembre). Más de 128.000 menores fueron deportados de EEUU entre 2014 y 2025. swissinfo.ch.
<https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A1s-de-128.000-menores-fueron-deportados-de-eeuu-entre-2014-y-2025,-seg%C3%BAnte-humanitario/89945557>

Educo. (2024). *La educación en emergencias: una tabla de salvación. Análisis de la financiación en 2023*. Educo.
<https://educowebmedia.blob.core.windows.net/educowebmedia/educospain/media/docs/publicaciones/2024/eee-una-tabla-de-salvacion-esp.pdf>

Education Cannot Wait. (2025). *State of Education for Crisis-Affected Children and Adolescents: Access and Learning Outcomes. Global Estimates 2025 Update*.
https://www.educationcannotwait.org/sites/default/files/2025-01/global_estimates_report_2025.pdf

Germanwatch. (2025). *Global Climate Risk Index 2025*.
<https://www.germanwatch.org/sites/default/files/2025-02/Climate%20Risk%20Index%202025.pdf>

Humanitarian Action. (2023). *Educación en Emergencias | El Salvador*.
<https://humanitarianaction.info/plan/1172/ge/7548>

IECAH. (2025). *Triple Nexo*. Recuperado de
<https://iecah.org/tematicas/triple-nexo/>

IECAH. (2022). *Informe Nexo 2022: el triple nexos en acción*. Recuperado de
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/INFORME_NEXO2022.pdf

Krichesky, M. (2023). *El reingreso a la escuela: experiencias y aprendizajes*. Fundación SES y Oficina de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
<https://orei.redclade.org/noticias/el-reingreso-a-la-escuela-experiencias-y-aprendizajes/>

Organización Internacional para las Migraciones – OIM. (2023). *Niñez y adolescencia migrante no acompañada retornada a Guatemala. Análisis de situación educativa* [Informe de resultados, GT2022]. https://infounitnca.iom.int/wp-content/uploads/2023/05/EHMH_-GT2022.pdf

Plan International. (2023). *Niñez y adolescencia migrante retornada en el norte de Centroamérica: Barreras y brechas educativas*. Plan International. <https://plan-international.org/publications/ninez-adolescente-retornada-centroamerica-brechas-educativas/>

Plan International. (2023). *The reality of girls' education in Latin America and the Caribbean*. En línea, disponible en: <https://plan-international.org/uploads/sites/55/2023/02/The-Reality-of-Girls-Education-Report.pdf>

Plan International. (2024). *Mujeres adolescentes en crisis: Diagnóstico completo*. <https://plan-international.org/uploads/sites/96/2024/04/Mujeres-Adolescentes-En-Crisis-%E2%80%93-Diagnostico-Completo-ESPANOL.pdf>

Prensa Libre. (2021, 30 noviembre). Guatemala retrocede en indicadores de educación, según evaluación regional de UNESCO. <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemala-retrocede-en-indicadores-de-educacion-segun-evaluacion-regional-de-unesco/>

Red CLADE / ODS4 Agenda 2030. (2023). *INFORME SOMBRA HONDURAS 2023- ODS4 AGENDA 2030*. <https://redclade.org/wp-content/uploads/INFORME-SOMBRA-HONDURAS-2023-ODS4-AGENDA-2030-PDF-UV.pdf>

Red CLADE. (2023). *Adolescentes y jóvenes fuera de la escuela: Las demandas para una enseñanza secundaria garante de derechos en América Latina y el Caribe*. <https://redclade.org/wp-content/uploads/Adolescentes-y-j%C3%B3venes-fuera-de-la-escuela-las-demandas-para-una-ense%C3%B1anza-secundaria-garante-de-derechos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el.pdf>

Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) & Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2023). *Incorporar la consolidación de la paz al enfoque del nexo en la educación en situaciones de emergencia: Prácticas prometedoras para superar las injusticias*. INEE y UNESCO. <https://inee.org/sites/default/files/resources/Bringing%20Peacebuilding%20to%20Nexus%20Thinking%20in%20EiE%20ES%20v1.1%20LowRes.pdf>

Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) (2025). *¿Cuál es el futuro para la Educación en Situaciones de Emergencias en América Latina y el Caribe?* [Entrada de blog]. INEE. <https://inee.org/es/blog/cual-es-el-futuro-para-la-educacion-en-situaciones-de-emergencias-en-america-latina-y-el>

Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). (s.f.). *Glosario de EeE: Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz*. Recuperado de <https://inee.org/es/glosario-EeE/nexo-humanitario-desarrollo-paz>

Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). (2025). *Education financing: aid to education accounts for only 3% of global humanitarian funding*. <https://inee.org/collections/education-financing>

Rueda Rodríguez, M. L. (2025). El rezago educativo como factor de riesgo a la vulnerabilidad social en México. *Revista Brasileira de Educação*, 30(1), 1-18.

<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/fgqWsq7tjgn3fzyyqXQRmPD/?lang=es>

Secretaría de Educación de Honduras. (2022). Estadísticas oficiales de matrícula.

<https://www.se.gob.hn>

Spotlight Initiative, ONU Mujeres, & organismos aliados. (2022). Los procesos migratorios en la incidencia de la violencia contra las mujeres y niñas: Centroamérica, México y República Dominicana.

https://www.spotlightinitiative.org/sites/default/files/publication/E1_Informe_FINAL.pdf

United Nations. (2025, July 17). From crisis to classroom: How the UN supports education in emergencies. <https://news.un.org/en/story/2025/07/1165417>

UNDP. (2025). Reflexiones y perspectivas para el enfoque de triple nexo: hdp_nexus_reflections-es.pdf.

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/hdp_nexus_reflections-es.pdf

UNESCO. (2021). *Informe sobre el derecho a la educación en la movilidad humana en Centroamérica y México*. UNESCO.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391916>

UNESCO. (2023). Estrategia regional de la UNESCO sobre movilidad humana y educación en América Central.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383674.locale=es>

UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report*. En línea, disponible en:

<https://gem-report-2023.unesco.org/>

UNESCO. (2024). Educación y movilidad humana en América Central, República Dominicana y México. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000394725.locale=es>

UNESCO. (2024). La educación en la movilidad humana en América Central: Datos y reflexiones para la acción.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000394183>

UNESCO. (2024). *La urgencia de la recuperación educativa en América Latina y el Caribe* (pp. 36-38). UNESCO.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388399>

UNESCO. (2025, enero 31). Qué debe saber sobre la educación en situaciones de crisis. Recuperado de

<https://www.unesco.org/es/emergencias/education/need-know>

UNESCO. (2024, septiembre 16). Los efectos de la pandemia en la educación de América Latina y el Caribe perdurarán por muchos años, urge acelerar los aprendizajes. Recuperado de

<https://www.unesco.org/es/articulos/efectos-de-la-pandemia-en-la-educacion-de-america-latina-y-el-caribe-perduraran-por-muchos-anos-urge>

UNESCO / OREALC. (2023). Resultados de logros de aprendizaje y factores asociados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019. <https://www.unesco.org/es/articulos/resultados-de-logros-de-aprendizaje-y-factores-asociados-del-estudio-regional-comparativo-y>

Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. (2025). Síntesis de estadísticas de niñas, niños y adolescentes migrantes, enero-agosto 2024. Secretaría de Gobernación.
http://politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2025.pdf

Campaña Mundial por la
EDUCACIÓN
Coalición española www.cme-espana.org



La CME en España está liderada por:



Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto "Campaña Mundial por la Educación: llamada a la acción por el ODS 4". El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Coalición española de la Campaña Mundial por la Educación y no refleja, necesariamente, la postura de la AECID.

Con la financiación de:

